INFORME DE SECRETARÍA. A despacho de la señora Juez el presente asunto para que se sirva proveer.

Santiago de Cali, 31 de mayo de 2022

La Secretaria,

VANESSA MEJÍA QUINTERO

**JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
AUTO**

REFERENCIA: VERBAL DE INOPONIBILIDAD A FIDEICOMISO CIVIL
DEMANDANTE: JORGE IGNACIO SÁNCHEZ RAMÍREZ.
DEMANDADO: JORGE IGNACIO SÁNCHEZ FRANCO HEREDERO DE TULIA AIDA FRANCO DE SÁNCHEZ
ANGELICA MARÍA CASANOVA FRANCO HEREDERA DE TULIA AIDA FRANCO DE SÁNCHEZ
HEREDEROS DETERMINADO E INDETERMINADOS DE HERNÁN GUEVARA FRANCO
RADICACIÓN: 760014003007202100911-00

Santiago de Cali, treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022)

La apoderada de la parte demandante, interpone recurso de reposición en subsidio de apelación en contra del auto del 15 de febrero del 2022, por el cual se negó el ampro de pobreza y multó al solicitante.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Manifiesta la recurrente que, referente a la solicitud del amparo presentado, dentro de las consideraciones que negaron dicho trámite, se encontró con la siguiente afirmación mencionada por el Juzgado:

“(.....) Dice el demandante, a través de su abogado que, junto con su difunta esposa, adquirió un bien inmueble identificado con M.I No. 130 – 187793 de la Oficina De Instrumentos Públicos de Puerto Tejada. (.....)”

Que la anterior afirmación realizada por el Despacho, no se relacionó en los hechos de la presente demanda, pues lo que indicó fue:

“(...) en vigencia de la sociedad conyugal con mi poderdante, la señora TULIA AIDA FRANCO DE SANCHEZ (Q.E.P.D) adquirió el siguiente bien inmueble..... (...)”

Por ello, menciona que, así como quedó consignado en la anotación No. 05 del certificado de tradición del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 130-187793, quien adquirió la totalidad del mismo y única propietaria de él, es su difunta esposa. Menciona que, si bien es cierto, el objetivo de su poderdante ante la demanda en el presente asunto, no busca cancelar el gravamen ni desvirtuar el acto que produjo su origen, si no que se reconozca el derecho a su poderdante como cónyuge de la occisa, de acceder a la sucesión que se lleva a cabo en otro Despacho judicial con respecto al inmueble que fue adquirió cuando la sociedad conyugal, aun se encontraba vigente.

Concluye argumentando que las pretensiones del presente proceso, no se encuentra inmersas en un fin económico y que su solicitud se centra o se encuentra fundamentada, en que su poderdante al ser un adulto mayor no cuenta con los recursos necesarios para sufragar el proceso.

CONSIDERACIONES

Atendiendo el recurso que interpone la apoderada de la parte demandante, se hace necesario abordar lo establecido por el C.G.P., en relación al amparo de pobreza, el cual tiene desarrollo en el artículo 151 y s.s.,

“ARTÍCULO 151. PROCEDENCIA. Se concederá el amparo de pobreza a la persona que no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos, salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso a título oneroso.”

Pues bien, la finalidad de la institución del amparo de pobreza desarrollada por el Legislador, es la de favorecer a las personas que por su condición socioeconómica no pueden sufragar los gastos derivados de un trámite judicial¹. Lo anterior, atendiendo los principios fundamentales constitucionales de derecho a la defensa, acceso a la Justicia e igualdad de partes consignados en el C.G.P., por ello, mediante sentencia T-114 del 2007, fue definida de la siguiente manera:

“El amparo de pobreza es entonces una medida correctiva y equilibrante, que dentro del marco de la Constitución y la ley busca garantizar la igualdad en situaciones que originalmente eran de desigualdad. Supone entonces un beneficio, que bien puede concederse a una sola de las partes, naturalmente aquella que lo necesita. Por igual motivo, este amparo no debe otorgarse al sujeto procesal que no se encuentre en la situación de hecho que esta institución busca corregir. De allí que resulte abstracta y conceptualmente válido que el juez decida no conceder el amparo de pobreza invocado por una de las partes, si conforme a la situación fáctica que se le presenta, dicho otorgamiento carece de justificación frente al caso concreto.”

De lo subrayado anteriormente, se encuentra que el Despacho mediante auto que negó el amparo al solicitante, basó sus argumentos debido a que la esposa del demandante la señora Tulia Aida Franco Paz (Q.E.P.D.), adquirió a título oneroso el inmueble objeto del presente asunto, argumento extraído del auto anteriormente citado, sin embargo, en síntesis con lo anterior, al existir una sociedad conyugal vigente, el Juzgado centrará sus argumentos y desglosará lo relacionado anteriormente en base a lo establecido por el artículo 180 del C. Civil, el cual prevé lo siguiente:

“ARTICULO 180. <SOCIEDAD CONYUGAL>. <Artículo modificado por el artículo 13 del Decreto 2820 de 1974. El nuevo texto es el siguiente:> Por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges, según las reglas del título 22, libro IV del Código Civil.”

Del acápite final del artículo anteriormente relacionado se establece mediante artículo 1774 del C. Civil lo siguiente:

“ARTICULO 1774. <PRESUNCIÓN DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL>. A falta de pacto escrito se entenderá, por el mero hecho del matrimonio, contraída la sociedad conyugal con arreglo a las disposiciones de este título.”

Analizadas las pruebas aportadas por la parte demandante, se evidencia que la celebración del matrimonio entre el señor Jorge Ignacio Sánchez y Tulia Aida Franco Paz (Q.E.P.D.), fue el 12 de febrero de 1977 (Folio 1, del Documento 04), aunado a lo anterior, el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 130-18793 bajo la anotación No. 005 del 28 de diciembre del 2007 (Folio 14, del Documento 04), se evidencia que fue adquirido por el modo de adquisición compraventa por la señora Tulia Aida Franco Paz (Q.E.P.D.), comprado a Asociación Mirandéña de Vivienda.

Por ende, se concluye que la occisa se obligó a pagar un precio en dinero la adquisición del anterior inmueble relacionado, en síntesis, a título oneroso. Bien inmueble que a las luces del Código Civil y su articulado ingresó a la sociedad conyugal vigente entre el demandante y su esposa, por lo que el inmueble no era únicamente de la señora Tulia Aida Franco Paz (Q.E.P.D.), si no al haber de la sociedad conyugal, al conjunto de bienes adquiridos por los esposos unidos por medio del matrimonio tal como se encuentra establecido en el numeral 5° del artículo 1781 del Código Civil:

¹ T-339 del 2018.

ARTICULO 1781. <COMPOSICIÓN DE HABER DE LA SOCIEDAD CONYUGAL>. El haber de la sociedad conyugal se compone: ...

5.) De todos los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera durante el matrimonio a título oneroso.

Por lo que no es posible reponer para revocar la decisión adoptada por el Despacho.

Por otra parte, el Juzgado encuentra que la formalidad de presentación del amparo de pobreza, no cumple con lo reglado por el artículo 152 del C.G.P., el cual prevé:

“ARTÍCULO 152. OPORTUNIDAD, COMPETENCIA Y REQUISITOS. El amparo podrá solicitarse por el presunto demandante antes de la presentación de la demanda, o por cualquiera de las partes durante el curso del proceso.

El solicitante deberá afirmar bajo juramento que se encuentra en las condiciones previstas en el artículo precedente, y si se trata de demandante que actúe por medio de apoderado, deberá formular al mismo tiempo la demanda en escrito separado.” (Negrilla por el Despacho)

Quien realiza la afirmación bajo juramento es la apoderada de la parte demandante, así se estableció en la solicitud de amparo de pobreza:

“AMIRA GARCÉS RIASCOS, mayor y domiciliada en Cali, identificado como aparece al pie de mi firma, abogado titulado y en ejercicio, actuando en nombre y representación del señor JORGE IGNACIO SANCHEZ, mayor, identificado con la C.C 14.936.530, con todo respeto solicito a su despacho, se sirva conceder a mi poderdante, el beneficio del AMPARO DE POBREZA, comprometiendo su juramento a través de su apoderada en el presente escrito” (Negrilla por el Despacho)

Para ello, la sentencia T-339 del 2018 abordó su procedibilidad frente a la solicitud presentada:

“En primer lugar, debe presentarse la solicitud de amparo de pobreza de manera personal, afirmando bajo juramento que está en las condiciones previstas en el artículo 151 del Código General del Proceso. En otras palabras, la persona interesada debe presentar una petición formal y juramentada ante el juez competente. Así lo ha señalado esta Corporación al precisar que el amparo pobreza tiene una naturaleza personal, es decir, que su reconocimiento no puede tramitarse de manera oficiosa por el funcionario judicial, sino que su procedencia, en específico, dependerá de la solicitud que haga la persona que no cuenta con la capacidad económica sufragar los gastos del proceso, constituyéndose en una carga procesal para la parte o el interviniente que pretenda beneficiarse de esta institución. En segundo término, este beneficio no puede otorgarse a todas las personas que de manera indiscriminada lo soliciten, sino únicamente a aquellas que reúnan objetivamente las condiciones para su reconocimiento, a saber, que soliciten de forma personal y motivada el amparo, y acrediten la situación socioeconómica que lo hace procedente.” (Negrillas por el Despacho)

Por lo que no basta simplemente con la manifestación que realizó la apoderada de la parte demandante, toda vez que el amparo de pobreza ampliamente definido en jurisprudencia anteriormente mencionada en las consideraciones de este auto, se encuentra enmarcado como mecanismo excepcional, pues de su juicio y su uso es de manera responsable de las condiciones en que la persona presenta en su solicitud dice estar², pues el articulado que regula la materia del amparo de pobreza no requiere de una carga probatoria de la condición económica, a quien le corresponde es a la parte solicitante a nombre propio y bajo su gravedad de juramento, allegar la solicitud de amparo de pobreza por medio de su apoderado, no a su apoderado realizar dicha solicitud.

RESUELVE

PRIMERO: NO REPONER el auto del 15 de febrero del 2022, por el cual se negó el amparo de pobreza.

² Auto interlocutorio No. 064 del 25 de febrero del 2019, bajo el radicado No. 13001-33-33-005-2018-00165-00 Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena.

SEGUNDO: SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 321 y s.s., del C.G.P, ante el superior, Juzgado Civil del Circuito de Cali, concédase en el efecto SUSPENSIVO el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la apoderada judicial de la parte demandante contra el auto del 15 de febrero del 2022.

**NOTIFÍQUESE,
MÓNICA MARÍA MEJÍA ZAPATA
JUEZ
NOTIFICADO POR ESTADO EL 1 DE JUNIO DEL 2022**

Firmado Por:

**Monica Maria Mejia Zapata
Juez
Juzgado Municipal
Civil 007
Cali - Valle Del Cauca**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c50584e622319f25905c79d065507aa687fe629da7c1c298bece42c474773e42**

Documento generado en 27/05/2022 04:45:19 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**